

No. 47319

**Argentina
and
Peru**

Agreement on residence for nationals of Argentina and the Republic of Peru. Buenos Aires, 15 June 2007

Entry into force: *10 December 2009 by notification, in accordance with article 14*

Authentic text: *Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Argentina, 12 April 2010*

**Argentine
et
Pérou**

Accord concernant la résidence pour les ressortissants de l'Argentine et de la République du Pérou. Buenos Aires, 15 juin 2007

Entrée en vigueur : *10 décembre 2009 par notification, conformément à l'article 14*

Texte authentique : *espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Argentine, 12 avril 2010*

[SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL]

ACUERDO
SOBRE RESIDENCIA PARA NACIONALES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ

La República Argentina y la República del Perú, en adelante “las Partes”:

REAFIRMANDO el deseo de la República Argentina y de la República del Perú de fortalecer y profundizar el proceso de integración así como los fraternales vínculos existentes entre ellos;

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN los avances en la relación bilateral alcanzados en el marco del Convenio de Migración entre la República Argentina y la República del Perú suscripto el 12 de agosto de 1998, y sus dos Protocolos Adicionales;

TENIENDO como antecedente las normas recogidas en la región para facilitar el acceso a la residencia, en particular el Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR;

RECONOCIENDO la responsabilidad compartida de ambos Gobiernos en la adopción de medidas que organicen y orienten los flujos migratorios entre las Partes, para que efectivamente sirvan como vehículos de integración entre ambos países;

CONOCIENDO la realidad geográfica, económica y social que caracteriza a ambas Partes y que ha originado, desde siempre, un permanente intercambio migratorio;

BUSCANDO solucionar la situación migratoria de los nacionales de nuestros países y posibilitar de forma efectiva su inserción en la sociedad de recepción;

CONVENCIDOS de la importancia de la regularidad migratoria como herramienta para combatir el tráfico de personas para fines de explotación laboral y otras situaciones que impliquen degradación de la dignidad humana;

PROCURANDO establecer reglas comunes para la tramitación de la autorización de residencia de los nacionales de las Partes;

ACUERDAN:

Artículo 1
OBJETO

Los nacionales de la República Argentina y la República del Perú que deseen residir en el territorio del otro país, podrán obtener una residencia legal en este último, de conformidad con los términos de este Acuerdo, mediante la acreditación de su nacionalidad y presentación de los requisitos previstos en el artículo 4 del presente Acuerdo.

Artículo 2
DEFINICIONES

Los términos utilizados en el presente Acuerdo, deberán interpretarse con el siguiente alcance:

"Estados Partes": República Argentina y República del Perú;

"Nacionales de una Parte": son las personas que poseen nacionalidad originaria de una de las Partes o nacionalidad adquirida por naturalización;

"Inmigrantes": son los nacionales de una Parte que manifiesten su deseo de establecerse en el territorio de la otra Parte de conformidad con el presente Acuerdo;

"Clandestinos": son los nacionales de una de las Partes que hubiesen ingresado al territorio de la otra Parte sin haberse sometido al control migratorio de ingreso o hubiesen ingresado de manera fraudulenta;

"País de origen": es el país de nacionalidad de los inmigrantes;

"País de recepción" es el país de la nueva residencia de los inmigrantes.

Artículo 3
ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente Acuerdo se aplica a:

1 Nacionales de una Parte, que deseen establecerse en el territorio de la otra, y que presenten ante la oficina consular respectiva su solicitud de ingreso al país y la documentación que se determina en el artículo 4 del presente Acuerdo.

2 Nacionales de una Parte que se encuentren en el territorio de la otra Parte y que presenten ante los servicios de migración del país de recepción la documentación que se determina en el artículo 4 del presente Acuerdo, dentro de los 365 días de su vigencia, prorrogables según las competencias de la Comisión Mixta Consultiva prevista en el artículo 11.

3 El procedimiento previsto en el punto 2 del presente artículo se aplicará con independencia de la categoría migratoria con la que hubiera ingresado el peticionante al territorio del país de recepción, e implicará la exención del pago de multas u otras sanciones más gravosas.

4 Los nacionales de las Partes que hubiesen ingresado al territorio del país de recepción como clandestinos no podrán acogerse a los beneficios del presente Acuerdo, en el territorio del país de recepción, debiendo a tal efecto egresar del mismo y tramitar el beneficio en su país de origen ante la autoridad consular respectiva.

Artículo 4 TIPO DE RESIDENCIA A OTORGAR Y REQUISITOS

1 A los peticionantes comprendidos en los puntos 1 y 2 del artículo 3, la representación consular o los servicios de migración correspondientes, según sea el caso, podrán otorgar una residencia temporaria de dos años, previa presentación de la siguiente documentación:

- a) Pasaporte válido y vigente o cédula de identidad o certificado de nacionalidad expedido por el agente consular del país de origen del peticionante acreditado en el país de recepción, de modo tal que resulte acreditada la identidad y nacionalidad del peticionante;
- b) Certificado que acredite la carencia de antecedentes judiciales y/o penales y/o policiales del peticionante en el país de origen -para el supuesto del artículo 3 punto 1- y en el país de recepción -para el supuesto previsto en el artículo 3 punto 2-;
- c) Declaración jurada de carencia de antecedentes internacionales penales o policiales;
- d) Pago de la tasa retributiva de servicios, conforme lo dispongan las respectivas legislaciones internas.

2 A los efectos de la legalización de los documentos, cuando la solicitud se tramite en sede consular, bastará la certificación de su autenticidad, conforme a los procedimientos establecidos en el país del cual el documento procede. Cuando la solicitud se tramite ante los servicios migratorios, dichos documentos sólo deberán ser certificados por el agente consular del país de origen del

peticionante acreditado en el país de recepción, sin otro recaudo. A los fines del registro, identificación y expedición de la documental identificatoria de las Partes, bastará la legalización de la partida de nacimiento efectuada por la autoridad consular de la Parte correspondiente acreditada en la otra Parte y cuya firma se encuentre registrada ante la autoridad migratoria y de identificación.

Artículo 5
RESIDENCIA PERMANENTE

La residencia temporaria podrá transformarse en permanente mediante la presentación del peticionante ante la autoridad migratoria del país de recepción, dentro de los noventa (90) días anteriores al vencimiento de la misma, acompañando la siguiente documentación:

- a) Constancia de residencia temporaria obtenida de conformidad a los términos del presente Acuerdo;
- b) Pasaporte válido y vigente o cédula de identidad o certificado de nacionalidad expedido por el agente consular del país de origen del peticionante acreditado en el país de recepción, de modo tal que resulte acreditada la identidad del peticionante;
- c) Certificado que acredite la carencia de antecedentes judiciales y/o penales y/o policiales en el país de recepción;
- d) Acreditación de medios de vida lícitos que permitan la subsistencia del peticionante y su grupo familiar conviviente;
- e) Pago de la tasa retributiva de servicios ante el respectivo servicio de migración, conforme lo dispongan las respectivas legislaciones internas.

Artículo 6
NO PRESENTACIÓN EN TÉRMINO

Los inmigrantes que una vez vencida la residencia temporaria de dos años otorgada en virtud del artículo 4 del presente Acuerdo, no se presentaron ante la autoridad migratoria del país de recepción, quedarán sujetos a las penalidades previstas en la legislación migratoria interna de cada Estado Parte.

Artículo 7
DERECHOS DE LOS INMIGRANTES Y DE LOS
MIEMBROS DE SUS FAMILIAS

Los nacionales de las Partes y sus familias que hubieren obtenido residencia en los términos del presente Acuerdo gozarán de los mismos derechos y libertades civiles, sociales, culturales y económicas en el país de recepción, en particular el derecho a trabajar, y ejercer toda industria lícita en las condiciones que disponen las leyes; peticionar a las autoridades; entrar, permanecer, transitar y salir del territorio de las Partes; asociarse con fines útiles y profesar libremente su culto, de conformidad a las leyes que reglamenten su ejercicio.

Artículo 8
PROMOCIÓN DE MEDIDAS RELATIVAS A CONDICIONES
LEGALES DE MIGRACIÓN Y EMPLEO EN LAS PARTES

Las Partes establecerán mecanismos de cooperación permanente tendientes a impedir el empleo ilegal de los inmigrantes en el territorio de la otra, a cuyo efecto adoptarán entre otras, las siguientes medidas:

- a) Mecanismos de cooperación entre los organismos de inspección migratoria y laboral, destinados a la detección y sanción del empleo ilegal de inmigrantes;
- b) Sanciones efectivas a las personas físicas o jurídicas que empleen nacionales de las Partes en condiciones ilegales. Dichas medidas no afectarán los derechos que pudieran corresponder a los trabajadores inmigrantes, como consecuencia de los trabajos realizados en estas condiciones;
- c) Mecanismos para la detección y penalización de personas individuales u organizaciones que lucren con los movimientos ilegales o clandestinos de trabajadores inmigrantes, cuyo objetivo sea el ingreso, la permanencia, la salida o el trabajo en condiciones abusivas de estas personas o de sus familiares;
- d) Las Partes intensificarán las campañas de difusión e información pública, a fin de que los potenciales migrantes conozcan sus derechos.

Las Autoridades competentes en materia migratoria y laboral son, en el caso de la República Argentina, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, respectivamente.

En el caso de la República del Perú, la Dirección General de Migraciones y Naturalización del Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, respectivamente.

Artículo 9
APLICACIÓN DE LA NORMA MÁS BENÉFICA

El presente Acuerdo será aplicado sin perjuicio de las normas o disposiciones internas de las Partes que sean más favorables a los inmigrantes.

Artículo 10
COMISIÓN MIXTA CONSULTIVA

Con el objeto de verificar la aplicación del presente Acuerdo, se establecerá una Comisión Mixta Consultiva. Dicha Comisión estará integrada por seis miembros, de los cuales cada Parte nombrará a tres, en representación de los respectivos Ministerios del Interior de la República Argentina y de la República del Perú y de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Trabajo de ambos países.

La Comisión se reunirá ordinariamente cada seis meses y extraordinariamente a requerimiento de cualquiera de las Partes.

Artículo 11
FACULTADES DE LA COMISIÓN MIXTA

La Comisión Mixta Consultiva, tendrá las siguientes funciones:

- a) Presentar propuestas para la interpretación de las cláusulas del presente Acuerdo;
- b) Asesorar a las autoridades competentes cuando éstas lo requieran o por propia iniciativa, en lo concerniente a la aplicación del presente Acuerdo;
- c) Proponer a las autoridades competentes de las Partes, las modificaciones y ampliaciones que considere pertinente efectuar al presente Acuerdo.

Artículo 12
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia que pueda surgir sobre la interpretación, implementación o aplicación del presente Acuerdo, será resuelta por las Partes mediante la vía diplomática.

Artículo 13
ENMIENDA

Cualquier Enmienda se hará por mutuo consentimiento de las Partes, mediante intercambio de Notas Diplomáticas, siguiendo el mismo procedimiento que el presente Acuerdo, para su entrada en vigencia.

Artículo 14
VIGOR, DURACIÓN Y DENUNCIA

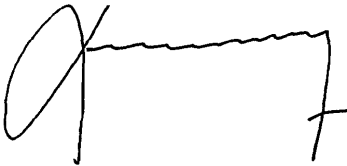
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última notificación por la que las Partes se comuniquen por la vía diplomática el cumplimiento de los requisitos legales internos necesarios para su entrada en vigor. Tendrá una duración de cinco años, prorrogándose automáticamente por periodos iguales.

Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el presente Acuerdo mediante notificación escrita dirigida a la otra Parte por vía diplomática. La denuncia surtirá efecto noventa (90) días después de haberse efectuado dicha notificación.

La terminación de este Acuerdo no afectará el normal desarrollo y conclusión de las solicitudes de residencia que se encuentren en trámite.

Hecho en Buenos Aires, a los 15 días del mes de junio de 2007, en dos ejemplares originales igualmente auténticos.

Por la República Argentina



Por la República del Perú



[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT ON RESIDENCE FOR NATIONALS OF ARGENTINA AND THE REPUBLIC OF PERU

The Argentine Republic and the Republic of Peru, hereinafter referred to as “the Parties”:

Reaffirming the desire of the Argentine Republic and the Republic of Peru to strengthen and deepen the process of integration and the fraternal ties that exist between them,

Considering the progress made in the bilateral relation achieved in the framework of the Agreement on Migration between the Argentine Republic and Republic of Peru, signed on 12 August 1998, and its two Additional Protocols,

Mindful of the rules adopted in the region to facilitate access to residence, particularly the Agreement Regarding the Residence of Nationals of the States Members of MERCOSUR,

Recognizing the shared responsibility of both Governments for the adoption of measures to organize and guide migratory flows between the Parties, so that they operate effectively as a means of integration between the two countries,

Aware of the geographic, economic and social reality that characterizes both Parties and has always given rise to permanent migratory flows,

Seeking to resolve the migratory situation of the nationals of our countries and enable them to effectively integrate into the host society,

Convinced of the importance of creating an appropriate legal framework for migrants as a tool to combat trafficking in persons for the purpose of exploiting their labour, or other situations that involve the denial of human dignity,

Aiming to set common rules for the processing of residence permit authorizations for the nationals of the Parties,

Have agreed as follows:

Article 1. Purpose

Nationals of the Argentine Republic and the Republic of Peru wishing to reside in the territory of the other country, may obtain legal residence in the latter, pursuant to the terms of this Agreement, through the accreditation of their nationality and presentation of the prerequisites referred to in article 4 of this Agreement.

Article 2. Definitions

The terms used in this Agreement shall have the following meanings:

“States Parties”: the Argentine Republic and the Republic of Peru;

“Nationals of a Party”: those persons who have the original nationality of one of the Parties or a who have acquired such nationality through naturalization;

“Immigrants”: nationals of a Party who express their wish to settle in the territory of the other Party, in accordance with this Agreement;

“Illegal immigrants”: persons who have entered the territory of the other Party without having submitted to migratory controls on entry, or those who have entered fraudulently;

“Country of origin”: the country of which the immigrants are nationals;

“Host country”: the country in which the immigrants take up residence.

Article 3. Scope

This Agreement applies to:

1. The nationals of a Party who wish to settle in the territory of the other Party and who submit to the respective consular office an application to enter the country along with the documentation specified in article 4 of this Agreement.

2. Nationals of one Party who are present in the territory of the other Party and submit to the migration services of the host country the documentation specified in article 4 of this Agreement, within 365 days of their entry into force, renewable according to the competencies of the Joint Consultative Commission referred to in article 11.

3. The procedure set out in paragraph 2 shall apply regardless of the migrant status with which the applicant may have entered the territory of the host country, and shall entail exemption from the payment of fines or other more onerous penalties.

4. Nationals of the Parties who have entered the territory of the host country as illegal immigrants shall not be eligible for the benefits of this Agreement in the territory of the host country. To become eligible, they must leave the host country and apply for the benefit before the appropriate consular authority in their country of origin.

Article 4. Type of residence and requirements for the granting thereof

1. The appropriate consular office or immigration authorities, as the case may be, may grant up to two years temporary residence to applicants covered by article 3, paragraphs 1 and 2, upon presentation of the following documentation:

(a) A current valid passport, identity card or a certificate of nationality issued by the consular office of the applicant’s country of origin accredited to the host country, in order to prove the applicant’s identity and nationality;

(b) A certificate proving that the applicant has no court and/or criminal and/or police record in the country of origin — in the situation covered by article 3 paragraph 1 — or in the host country — in the situation covered by article 3 paragraph 2;

(c) A sworn statement that the applicant has no international criminal or police record;

(d) Certification of payment of charges for services, in accordance with the respective domestic laws.

2. For the authentication of documents, in cases where the application is made to a consular office, certification of authenticity in accordance with the procedures established in the country in which the document was issued shall suffice. Where the application is made to the immigration authorities, the authenticity of documents need only be certified by the consular official of the applicant's country of origin accredited to the host country, no other formalities being required. For the purposes of registration, identification, and issuance of the identification document of the Parties, authentication of the birth certificate made by the consular authority of the corresponding Party accredited in the other Party, whose signature is registered with the migratory and identification authority, shall suffice.

Article 5. Permanent residence

Within 90 days prior to the expiration of a temporary residence permit, an immigrant may apply for permanent residence by reporting to the immigration authorities of the host country, with the following documentation:

(a) Evidence of the acquisition of temporary residence in accordance with the terms of this Agreement;

(b) A current valid passport, identity card or certificate of nationality issued by the consular official of the applicant's country of origin accredited to the host country in order to prove the applicant's identity;

(c) A certificate proving that the applicant has no court and/or criminal and/or police record in the host country;

(d) Evidence of the possession of legal means of subsistence for the applicant and his family living with him;

(e) Certification of payment to the appropriate immigration service of charges for services, in accordance with the respective domestic laws.

Article 6. Failure to report on expiration of permit

Immigrants who fail to report to the immigration authorities of the host country upon the expiration of the temporary residence of up to two years granted under article 4 herein shall be subject to the domestic immigration law of each State Party.

Article 7. Rights of immigrants and their family members

Nationals of the Parties and their families who have been granted residence under this Agreement shall enjoy the same civil, social, cultural and economic rights and freedoms as nationals of the host country, in particular the right to work; to carry on any lawful activity provided by law; to petition the authorities; to enter, stay in, pass through and leave the territory of the Parties; to form associations for useful purposes, and to practise their religion freely, in accordance with the laws regulating the exercise of those rights.

Article 8. Promotion of measures relating to legal conditions for migration and employment in the Parties

The Parties shall establish permanent cooperation mechanisms to prevent the illegal employment of immigrants in the territory of the other Party, to which end they shall adopt the following measures, among others:

(a) Cooperation mechanisms between the immigration and labour inspection authorities with a view to uncovering and penalizing illegal employment of immigrants;

(b) Effective sanctions against individuals or legal entities that employ nationals of the Parties illegally. Such measures shall not affect the rights to which migrant workers are entitled by virtue of the work done in such circumstances;

(c) Mechanisms to detect and penalize officials or organizations that profit from illegal or clandestine movements of migrant workers, the object of which is the illegal entry, stay or employment of those persons or their family members;

(d) The Parties shall intensify their public information campaigns to ensure that potential immigrants know their rights.

The competent authorities on migratory and labour issues are, in the case of the Argentine Republic, the Ministry of the Interior and the Ministry of Labour, Employment and Social Security, respectively.

In the case of the Republic of Peru, the Directorate General of Migrations and Naturalization of the Ministry of the Interior and the Ministry of Labour and Employment Promotion, respectively.

Article 9. Application of most favourable rule

This Agreement shall be implemented without prejudice to such domestic rules or provisions of each Party that are more favourable to immigrants.

Article 10. Joint Consultative Commission

A joint consultative commission will be set up to oversee the implementation of this Agreement. This Commission will consist of six members, of which each Party shall designate three, in representation of the respective Ministries of the Interior of the Argentine Republic and the Republic of Peru, and the Ministries of Foreign Relations and Labour of the two countries.

The Commission shall meet regularly every six months, and on an exceptional basis whenever requested by either of the Parties.

Article 11. Powers of the Joint Commission

The Joint Consultative Commission shall have the following functions:

(a) To present proposals for the interpretation of the clauses of this Agreement;

(b) To assist the competent authorities, either when requested by them or on its own initiative, on matters relating to the application of this Agreement;

(c) To propose to the competent authorities of the Parties, any changes and extensions it deems relevant to make to this Agreement.

Article 12. Dispute settlement

Any dispute that may arise concerning the interpretation, implementation or application of this Agreement, shall be resolved by the Parties through the diplomatic channel.

Article 13. Amendment

Any amendment to this Agreement shall be made by mutual consent between the Parties, through the exchange of diplomatic notes, and shall take effect according to the procedure for the entry into force of this Agreement.

Article 14. Validity, and duration and termination

This Agreement shall enter into force as soon as both Parties have notified each other, through the diplomatic channel, that the domestic legal requirements for its entry into force have been completed. The Agreement will last for five years and be renewed automatically for equal periods.

Either of the Parties may terminate this Agreement by giving written notice to the other Party through the diplomatic channel. Termination shall take effect 90 days after the aforementioned notice has been given.

The termination of this Agreement shall not affect the normal development and completion of applications for residence that are currently being processed.

DONE in Buenos Aires on 15 June 2007, in two equally authentic original copies.

For the Argentine Republic:

JORGE TAIANA

Minister of Foreign Affairs, International Trade and Worship

For the Republic of Peru:

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÚNDE

Chancellor

[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD CONCERNANT LA RÉSIDENCE POUR LES RESSORTISSANTS DE L'ARGENTINE ET DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU

La République argentine et la République du Pérou, ci-après dénommées « les Parties »,

Réaffirmant leur désir mutuel de renforcer et d'approfondir le processus d'intégration ainsi que les liens fraternels existants entre eux,

Prenant en considération les progrès réalisés dans les relations bilatérales dans le cadre de l'Accord de migration signé entre la République argentine et la République du Pérou, le 12 août 1998, et de ses deux Protocoles supplémentaires,

Prenant comme antécédents les normes recueillies dans la région pour faciliter l'accès à la résidence, notamment l'Accord concernant la résidence des ressortissants des États Parties du MERCOSUR,

Reconnaissant la responsabilité partagée des deux Gouvernements dans la prise de mesures visant à organiser et à diriger les flux migratoires entre les Parties de façon à les transformer en un moyen d'intégration entre les deux pays,

Connaissant la réalité géographique, économique et sociale qui caractérise les deux Parties et qui est depuis toujours à la base d'échanges migratoires permanents,

Cherchant à résoudre la situation migratoire des ressortissants de leurs pays et à permettre leur insertion efficace dans la société hôte,

Convaincus de l'importance de la régularisation des immigrants en tant qu'outil pour combattre le trafic de personnes dans le cadre de l'exploitation professionnelle et d'autres situations, qui entraînent une dégradation de la dignité humaine,

Soucieux d'établir des règles communes pour les formalités d'autorisation de résidence des ressortissants des Parties,

Sont convenues de ce qui suit :

Article premier. Objet

Les ressortissants de la République argentine et de la République du Pérou qui souhaitent résider sur le territoire de l'autre État pourront obtenir une résidence légale dans ce dernier, en conformité avec les termes de cet Accord, moyennant l'attestation de leur nationalité et la présentation des éléments requis visés à l'article 4 du présent Accord.

Article 2. Définitions

Les termes et expressions utilisés dans le présent Accord ont les significations ci-après :

L'expression « les États Parties » désigne la République argentine et la République du Pérou;

L'expression « ressortissants d'une Partie » désigne les personnes qui possèdent la nationalité d'origine d'une des Parties ou ont acquis cette nationalité par naturalisation;

Le terme « immigrants » désigne les ressortissants d'une Partie qui manifestent le désir de s'installer dans le territoire de l'autre Partie, conformément aux dispositions du présent Accord;

Le terme « clandestins » désigne les ressortissants d'une des Parties qui sont entrés sur le territoire de l'autre Partie sans être passés par le contrôle d'immigration à l'entrée ou qui sont entrés de manière frauduleuse;

L'expression « pays d'origine » désigne le pays dont les immigrants possèdent la nationalité;

L'expression « pays hôte » désigne le nouveau pays dont les immigrants sont résidents.

Article 3. Champ d'application

Le présent Accord s'applique :

1. Aux ressortissants d'une Partie qui souhaitent s'installer dans le territoire de l'autre et qui présentent aux bureaux consulaires respectifs une demande d'admission dans le pays, accompagnée des documents spécifiés à l'article 4 du présent Accord.

2. Aux ressortissants d'une Partie qui se trouvent dans le territoire de l'autre Partie et qui présentent aux services de migration du pays hôte les documents spécifiés à l'article 4 du présent Accord, dans les 365 jours qui suivent leur entrée en vigueur, renouvelables selon les compétences de la Commission mixte consultative prévue à l'article 11.

3. La procédure visée au paragraphe 2 s'appliquera indépendamment de la condition migratoire à l'admission du requérant sur le territoire du pays hôte et elle entraînera l'exemption du paiement d'amendes ou d'autres sanctions plus sévères.

4. Les ressortissants des Parties qui seraient entrés sur le territoire du pays hôte en tant que clandestins ne pourront pas bénéficier des avantages du présent Accord, sur le territoire du pays hôte; ils devront pour cela ressortir de ce dernier et effectuer les formalités nécessaires dans leur pays d'origine auprès du service consulaire concerné.

Article 4. Type de résidence et conditions à remplir

1. Les autorités consulaires ou les autorités d'immigration correspondantes, selon le cas, peuvent accorder un permis temporaire de résidence de maximum deux ans aux ressortissants visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3, sur présentation des documents suivants :

a. Un passeport en cours de validité, une pièce d'identité ou un certificat de nationalité délivré par le représentant consulaire du pays d'origine du requérant accrédité auprès du pays hôte, afin de prouver l'identité et la nationalité du requérant;

b. Un certificat fournissant la preuve qu'il n'existe pas de dossier judiciaire et/ou criminel et/ou de police du requérant dans le pays d'origine, dans l'hypothèse de l'article 3, paragraphe 1, et dans le pays hôte, dans l'hypothèse de l'article 3, paragraphe 2;

c. Une déclaration sous la foi du serment selon laquelle il n'existe pas de dossier criminel ou de dossier de police international de l'intéressé;

d. L'attestation de paiement des factures des services, conformément aux législations internes respectives.

2. Dans le cas où la demande est formulée par l'intermédiaire d'un bureau consulaire, un certificat d'authenticité conforme aux procédures établies dans le pays dans lequel le document a été établi sera suffisant. Dans le cas où la demande est présentée aux autorités d'immigration, il suffira que l'authenticité des documents soit certifiée par le représentant consulaire du pays d'origine du requérant accrédité auprès du pays hôte, sans autre formalité. Aux fins de l'enregistrement, de l'identification et de l'expédition des documents d'identification des Parties, il suffira que l'authenticité de l'acte de naissance soit certifiée par l'autorité consulaire correspondante accréditée auprès de l'autre Partie et dont la signature se trouve déposée auprès de l'autorité d'immigration et d'identification.

Article 5. Résidence permanente

La résidence temporaire pourra se transformer en résidence permanente sur présentation du requérant et des documents suivants auprès des autorités d'immigration du pays hôte, dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui précèdent l'expiration de la résidence temporaire :

a. Une preuve de résidence temporaire obtenue conformément aux termes du présent Accord;

b. Un passeport en cours de validité, une pièce d'identité ou un certificat de nationalité fourni par le représentant consulaire du pays d'origine du requérant accrédité auprès du pays hôte, afin de prouver l'identité du requérant;

c. Un certificat attestant qu'il n'existe pas de dossier criminel, ni de dossier judiciaire et/ou de dossier de police du requérant dans le pays hôte;

d. La preuve de moyens de subsistance légaux qui permettent la subsistance du requérant et de son groupe familial cohabitant;

e. L'attestation des autorités d'immigration correspondantes que la facture des services a été réglée, conformément aux législations internes respectives.

Article 6. Non-présentation dans les délais

Les immigrants qui, à l'échéance de la résidence temporaire accordée pour un maximum de deux ans aux termes de l'article 4 du présent Accord, ne se présentent pas devant les autorités d'immigration du pays hôte, seront soumis à la législation interne de chaque État Partie en matière d'immigration.

Article 7. Droits des immigrants et de leur famille

Les ressortissants des Parties et leurs familles qui ont obtenu le permis de résidence en vertu du présent Accord bénéficieront des mêmes droits et libertés civils, sociaux, culturels et économiques dans le pays hôte, en particulier du droit de travailler et de se livrer à toute activité légale dans le cadre des lois; d'adresser des requêtes aux autorités;

d'entrer, séjourner, transiter dans le territoire des Parties et en sortir; de former des associations à des fins utiles ainsi que de pratiquer librement leur religion, conformément à la législation régissant l'exercice de ces droits.

Article 8. Promotion de mesures liées aux conditions juridiques de migration et d'emploi dans le territoire des Parties

Les Parties mettront en place des mécanismes permanents de coopération en vue d'empêcher l'emploi d'étrangers en situation irrégulière dans le territoire de l'autre Partie, et à cet effet adopteront, notamment, les mesures ci-après :

a) Des mécanismes de coopération entre les autorités d'immigration et d'inspection du travail dans le but de détecter et de pénaliser l'emploi de migrants en situation irrégulière;

b) Des sanctions effectives appliquées contre les personnes physiques ou morales qui emploient des ressortissants des Parties illégalement. De telles mesures ne porteront pas atteinte aux droits attribués aux travailleurs migrants par suite des travaux effectués dans ces conditions;

c) Des mécanismes visant à identifier et pénaliser les personnes ou organisations qui tirent profit de mouvements illégaux ou clandestins de travailleurs migrants, dont l'objectif est l'entrée, le séjour ou l'emploi illégal de ces personnes ou des membres de leur famille;

d) Les Parties intensifieront les campagnes de diffusion et d'information publique, afin que les immigrants potentiels connaissent leurs droits.

Les autorités compétentes en matière de migrations et de travail sont, dans le cas de la République argentine, respectivement le Ministère de l'intérieur et le Ministère du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale.

Dans le cas de la République du Pérou, il s'agit respectivement de la Direction générale de l'immigration et de la naturalisation du Ministère de l'intérieur et du Ministère du travail et de la promotion de l'emploi.

Article 9. Application de la règle la plus favorable

Le présent Accord sera appliqué sans préjudice de normes ou dispositions internes des Parties qui sont plus favorables aux immigrants.

Article 10. Commission mixte consultative

Une commission mixte consultative sera créée pour vérifier la bonne application du présent Accord. Cette Commission comprendra six membres, et chaque Partie en nommera trois, pour représenter respectivement les Ministères de l'intérieur de la République argentine et de la République du Pérou ainsi que les Ministères des relations extérieures et du travail des deux pays.

La Commission se réunira normalement tous les six mois et de manière extraordinaire à la demande de l'une ou l'autre des Parties.

Article 11. Pouvoirs de la Commission mixte

La Commission mixte consultative exercera les fonctions suivantes :

- a) Présenter des propositions visant l'interprétation des clauses du présent Accord;
- b) Assister les autorités compétentes lorsque celles-ci le demandent ou de sa propre initiative en ce qui concerne l'application du présent Accord;
- c) Proposer aux autorités compétentes des Parties les modifications et extensions qu'elle considère judicieuses pour le présent Accord.

Article 12. Résolution de différends

Tout litige qui pourrait surgir quant au champ d'application, à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sera résolu par les Parties, par la voie diplomatique.

Article 13. Amendements

Tout amendement sera soumis au consentement mutuel des Parties, par voie d'échange de notes diplomatiques, en observant la même procédure que pour le présent Accord pour son entrée en vigueur.

Article 14. Entrée en vigueur, durée et dénonciation

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification par laquelle les Parties se communiquent, par la voie diplomatique, l'accomplissement des formalités internes légales requises pour son entrée en vigueur. Il restera valable pendant cinq ans et sera automatique prorogé pour des périodes identiques.

L'une ou l'autre des Parties pourra le dénoncer sur notification écrite transmise à l'autre Partie par la voie diplomatique. La dénonciation sortira ses effets quatre-vingt-dix (90) jours après ladite notification.

L'échéance du présent Accord n'affectera pas le bon déroulement ni la conclusion des demandes de résidence qui seraient en cours.

FAIT à Buenos Aires, le 15 juin 2007, en deux exemplaires originaux faisant également foi.

Pour la République argentine :

JORGE TAIANA

Ministre des Affaires étrangères, du commerce international et du culte

Pour la République du Pérou :

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAÜNDE

Chancelier